



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN TERCERA**

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020).

| | |
|--------------------------|---|
| JUEZ | ÁLVARO CARREÑO VELANDIA |
| MEDIO DE CONTROL: | ACCIÓN DE TUTELA |
| RADICACIÓN No.: | 110013343-064-2020-00035-00 |
| DEMANDANTE: | Ruth Carrillo Mondragón como agente oficiosa de Oscar Fabián Agudelo Carrillo |
| DEMANDADO: | Policía Nacional |
| ASUNTO | DECIDE ACCIÓN DE TUTELA |

ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA No. 13

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por **Ruth Carrillo Mondragón como agente oficiosa de su hijo Oscar Fabián Agudelo Carrillo** en contra del **Policía Nacional**, solicitando la protección de su derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerados por dicha entidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. HECHOS Y PRETENSIONES

En su escrito el accionante expuso:

-. El señor Oscar Fabián Agudelo como consecuencia de un accidente de tránsito sufrido el día 28 de marzo de 2015 cuando se encontraba laborando como patrullero al servicio de la Policía Nacional, viene padeciendo patología profunda de deterioro mental producto de la enfermedad mental diagnosticada: esquizofrenia paranoide.

-. El señor Oscar Fabián Agudelo actualmente posee dos créditos bancarios adquiridos con el bando BBVA: 00130130009600268113 001301300096000265317 los cuales se están cobrando por vía de un proceso ejecutivo singular que instauró esa entidad financiera y que cursa en el Juzgado 55 Civil Municipal de Bogotá bajo el radicado 11001400305520180051100.

-. Juzgado 55 Civil Municipal de Bogotá mediante auto ordenó el embargo de salario y cuenta bancaria del señor Agudelo, por lo que se le está descontando de la remuneración mensual que en caso de enfermedad le

está pagando actualmente la Policía de las prestaciones sociales como lo estipula el Decreto 1091 de 1995 y la Policía Nacional lo ha autorizado como empleador, vulnerándole el derecho fundamental al debido proceso porque tal descuento no está permitido por la ley así provenga de una orden judicial, debido a que el señor Agudelo está incapacitado totalmente desde el año 2015 y así seguirá de por vida, debido a la esquizofrenia que padece y está a la espera de obtener la pensión de invalidez por dicha afección.

- Los descuentos que autorizó y está realizando la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía son de la remuneración que en caso de enfermedad Oscar Fabián Agudelo tiene derecho de las prestaciones sociales (artículo 40 Decreto 1091 de 1995) por estar incapacitado.

- Los descuentos que se están haciendo le están vulnerando el derecho al debido proceso por el artículo 58 del Decreto 1091 de 1995 establece que *"Las asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales a que se refiere este decreto, no son embargables judicialmente..."*

Frente a lo anterior, **las pretensiones** del actor son:

- Tutelar el derecho fundamental al debido proceso frente a la actuación de la accionada.

- Ordenar a la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera que en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia, suspenda el descuento que le realiza a Oscar Fabián Agudelo a favor del proceso ejecutivo singular, ya que lo que devenga son las prestaciones sociales que recibe mensualmente por estar incapacitado y no es considerado salario como lo precisan las normas vigentes.

- Ordenar a la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera que en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia, le devuelvan a Oscar Fabián Agudelo el valor correspondiente a los descuentos hechos.

2.2. TRÁMITE IMPRESO EN ESTA INSTANCIA

El Despacho mediante auto de fecha 14 de febrero de 2020 admitió la demanda y ordenó notificar al G. OSCAR ATEHORTÚA DUQUE DIRECTOR GENERAL LA POLICÍA NACIONAL o quien hiciera sus veces.

Dicha decisión fue notificada a las partes tal como consta a folios 64 a 68 del plenario.

2.3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

A través de la cuenta de correo electrónico ditah.tutelas@policia.gov.co el MG Álvaro Pico Malaver en su calidad de Director de Talento Humano de la Policía Nacional, se pronunció contestando la demanda el día 18 de febrero de 2020 (fls.70-76).

Luego de reseñar los antecedentes, hechos y pretensiones de la acción constitucional, centró sus argumentos en que la señora Ruth Carrillo Mondragón al actuar como agente oficiosa de su hijo Oscar Fabián Agudelo Carrillo carece de legitimación en la causa por activa.

Con base en comunicación interna del Jefe del Grupo de Embargos del Área de Nómina de Personal Activo de la Dirección de Talento Humano, indicó respecto a los argumentos respecto de los cuales, por estar el señor Agudelo Carrillo incapacitado, la remuneración recibida mensualmente es una prestación social, y en consecuencia el descuento a razón de la medida cautelar no está permitido por la ley; que si bien es cierto, las prestaciones sociales son inembargables atendiendo lo establecido en el artículo 58 del Decreto 1091 de 1995, también es cierto que el artículo 48 de la Constitución Política establece que la fuerza pública tiene un régimen de seguridad social especial y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 señala que dicha ley no es aplicable a las fuerzas militares y de policía.

Por las anteriores normas y el artículo 40 del Decreto 1091 de 1995 se establece que en caso de enfermedad de un miembro activo, disfrutará de toda su remuneración a su grado, es decir, se pagará mensualmente lo correspondiente al salario, en consecuencia, la remuneración recibida por el señor Oscar Fabián Agudelo Carrillo no corresponde a una prestación social, por lo cual no es aplicable a este caso concreto el artículo 58.

De esta manera el Área de Nómina de Personal Activo – Grupo de Embargos actuó dentro del marco legal, sin vulnerar ninguno de los derechos fundamentales, dando cumplimiento a los deberes legales y constitucionales bajo los cuales enmarcan cada uno de sus procesos y procedimientos en materia de descuentos a través de la nómina de personal activo.

Con base en lo anterior, la entidad accionada solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por activa.

2.4. ELEMENTOS PROBATORIOS

Con el escrito de tutela, la accionante aportó:

- Copia de la captura de pantalla sobre el estado del proceso ejecutivo 11001400305520180051100 (fls.9-10).
- Copia de la certificación expedida por el Jefe del Grupo de Novedades de Nómina de la Policía Nacional (fl.11).
- Copia de parte de la historia clínica de Oscar Fabián Agudelo Carrillo (fls.12-40).
- Copia de los desprendibles de nómina desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019 y de febrero de 2020.
- Poder otorgado por Oscar Fabián Agudelo Carrillo a Ruth Carrillo Mondragón (fls.59-60)

Aportado por la Policía Nacional:

- Copia de la comunicación interna del Jefe del Grupo de Embargos al Director de Talento Humano (fls.73-74)
- Copia de las comunicaciones tanto del juzgado 55 civil municipal a la Policía Nacional y viceversa (fls.74 reverso - 76)

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

3.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si la Policía Nacional ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de Oscar Fabián Agudelo Carrillo representado por su madre y agente oficiosa Ruth Carrillo Mondagón al haber dado curso a una orden de embargo ordenada por el Juzgado 55 Civil Municipal sobre los valores devengados por aquel como miembro de esa institución, desconociendo lo preceptuado en el artículo 58 del Decreto 1091 de 1995.

El despacho encuentra que contra el accionante cursa un proceso ejecutivo a instancias del Juzgado 55 Civil Municipal bajo el radicado 11001400305520180051100¹ dentro del cual se decretó el embargo y retención² de la quinta parte que exceda el salario mensual el mínimo legal y

¹ Donde el demandante es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., BBVA Colombia.

² Según se observa del contenido del Oficio 2351 radicado en la Policía Nacional el 23 de julio de 2018 (fl.74 reverso).

convencional y los demás emolumentos que correspondan a dicha asignación salarial devengada por el señor Agudelo Carrillo.

Y que dicha medida cautelar fue acatada por la Policía Nacional de acuerdo a como lo informó a ese Juzgado con oficio de fecha 31 de julio de 2018 (fl.75).

De lo anterior evidencia el Despacho que el actor, representado por su señora madre, es sujeto pasivo de un proceso ejecutivo civil, el cual se rige en sus etapas y procedimientos por el Código General del Proceso vigente, ritual en el que se encuentran establecidos los términos y oportunidades de defensa de sus derechos, entre los cuales se cuenta, indudablemente, la garantía fundamental del debido proceso.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial del derecho al debido proceso

El debido proceso está consagrado en el artículo 29 superior el cual indica:

*"El debido proceso se aplicará a **toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.***

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

(...)"

Así mismo la Corte Constitucional indicó el concepto y alcance del mismo en los siguientes términos:

*"Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". **La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.** La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, **le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, "con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción".** En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnimoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico "la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro*

*de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1º y 2º de la C.P)."*³

De lo anterior se desprende que las entidades públicas deben respetar el procedimiento establecido en las leyes o actos administrativos que regulan el trámite o ruta a seguir para acceder a un derecho o desarrollar un proceso judicial o administrativo.

3.4. La administración de justicia y el derecho de defensa

La administración de justicia está definida como *"la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional."*⁴

A su vez el artículo 3º de la ley estatutaria de administración de justicia, en desarrollo del artículo 29 Superior indica: *"ARTÍCULO 3o. DERECHO DE DEFENSA. En toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley..."*

En este contexto es preciso indicar igualmente que jurisprudencialmente ha sido reconocido de tiempo atrás que el cumplimiento de las decisiones judiciales se constituye en garantía de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho. De lo anterior se deriva que los funcionarios públicos se encuentran sometidos al cumplimiento de dichas órdenes so pena de incurrir en la comisión de delitos y faltas disciplinarias.

3.5. Caso Concreto

La señora Ruth Carrillo Mondagón como agente oficiosa de su hijo Oscar Fabián Agudelo Carrillo solicita la tutela de su derecho al debido proceso porque considera que dicho precepto superior le ha sido vulnerado por parte de la Policía Nacional al dar curso a una medida cautelar dispuesta por el Juzgado 55 Civil Municipal, con la cual se embargó la quinta parte de su salario mensual descontando el mínimo legal o convencional y los demás emolumentos que correspondan a dicha asignación salarial devengada por su hijo.

De entrada establece este Despacho que la acción constitucional

³ Sentencia Corte Constitucional C-980-10, M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

⁴ Ley 270 de 1996 artículo 1º.

instaurada no está llamada a prosperar por las siguientes razones:

- No está demostrado que con su acción u omisión, la entidad accionada haya vulnerado el derecho al debido proceso. A contrario sensu de lo afirmado por la accionante, la entidad ha actuado en virtud del principio de legalidad y en acatamiento a una orden judicial.

- Se avizora de las pruebas aportadas, que dentro de un proceso ejecutivo civil una autoridad judicial decretó, a solicitud de parte, una medida cautelar consistente en el embargo de una parte del salario de un funcionario público, Oscar Fabián Agudelo Carrillo, y la autoridad administrativa de que depende dicho pago, la Policía Nacional, ha acatado dicha decisión judicial, no pudiéndose sustraer de la misma. Ante lo anterior, este tipo de cautelas son propias y naturales de los procesos ejecutivos donde la obligación versa sobre el pago de sumas de dinero, por lo que con su solo decreto por el juez no puede derivarse vulneración al debido proceso, más cuando como lo señaló la entidad accionada, los emolumentos que está recibiendo el señor Agudelo Carrillo no constituyen una prestación social sino que hacen parte de su salario como miembro de la Policía Nacional.

- El juez constitucional no puede transgredir la competencia del juez ordinario ante quien se tramita el proceso ejecutivo. La instancia obvia y natural ante la cual se deben tramitar, dentro de las oportunidades y términos establecidos, los recursos que otorga la ley, es ante el juez del proceso⁵. Es decir, que si la parte accionante considera que el embargo es ilegal, debe elevar la respectiva solicitud al Juzgado Civil Municipal que conoce del proceso ejecutivo, en aplicación de lo previsto en el CGP.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA:

PRIMERO: NEGAR EL AMPARO del derecho fundamental al debido proceso del señor de Oscar Fabián Agudelo Carrillo representado por Ruth Carrillo Mondagón como agente oficiosa, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

⁵ Vergi gratia: el recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo (inciso 2º del artículo 430 y artículo 438 del CGP), las excepciones y su trámite (artículo 442 y subsiguientes del CGP)

TERCERO: En firme la presente providencia y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÁLVARO CARRÉÑO VELANDIA
Juez

CASZ